



Columna



Oswaldo Urrutia
Consejero regional

Frente a la incompetencia del Estado

Lo conocido en los últimos días sobre una eventual adulteración de reportes ambientales en la Refinería de Concón de Enap no es un hecho aislado. Es la expresión de una cadena de decisiones fallidas, con responsables claros, que hoy deja a miles de personas sin certezas sobre la calidad del aire que respiran.

En 2024, la Seremi del Medio Ambiente adquirió -con financiamiento del Gobierno Regional por más de mil millones de pesos- 18 equipos para monitoreo de calidad del aire, destinados a establecimientos educacionales de Quintero y Puchuncaví. A ello se sumaron recursos para implementar un observatorio ambiental en la Universidad de Playa Ancha.

Tras operar sólo algunos meses, los equipos fueron retirados a fines de 2024 para su calibración y, hasta hoy, no han vuelto a funcionar. El observatorio nunca se implementó y los equipos permanecen almacenados, fuera de servicio.

No hay explicación técnica que justifique una falla de esta magnitud. Hay decisiones mal tomadas y responsabilidades mal asumidas.

La Seremi del Medio Ambiente impulsó una iniciativa que no logró implementar. El Gobierno Regional financió sin asegurar su continuidad operativa. Y la Universidad de Playa Ancha fue mandata para una tarea para la cual no contaba con capacidades técnicas ni recursos suficientes.

A esto se suma un nuevo antecedente: Enap, empresa estatal, está hoy bajo cuestionamiento por la eventual manipulación de datos, en un contexto donde el sistema de fiscalización no detectó oportunamente estas irregularidades.

Mientras todo esto ocurre, se instala una paradoja difícil de ignorar: las empresas del sector industrial mantienen seis estaciones de medición de la calidad del aire operando en línea, con datos disponibles para la comunidad. Es decir, mientras el Estado no logra medir, quienes deben ser fiscalizados sí lo hacen.

Más aún, hoy la única información continua y disponible en tiempo real proviene de esa red privada. No porque ese sea el modelo ideal, sino porque el sistema público simplemente no está funcionando.

El problema de fondo es la desconfianza que se instala en la capacidad del propio Estado para cumplir su rol. Un sistema serio no excluye información: la íntegra, la audita y la válida. Pero para eso, primero, debe ser capaz de medir.

El efecto es evidente: en una de las zonas más sensibles del país, hoy no existe certeza plena sobre lo que respiran miles de personas.

Cuando el Estado pierde la capacidad de medir, también pierde la capacidad de proteger a quienes debe cuidar. Los habitantes de Concón, Quintero y Puchuncaví no merecen este nivel de abandono ni vivir en la incertidumbre permanente sobre el aire que respiran.